

Año 5  
Número 6  
Verano 2018

# Revista de Políticas Sociales

# América Latina en el siglo XXI: ¿Nuevas derechas o nuevos modos de las viejas derechas?

## Comenzando por el principio: las "décadas perdidas" neoliberales

*Carlos Ciappina*

Docente de la carrera de  
Trabajo Social, UNM

ciappinac@gmail.com

Los procesos denominados "de transición" (Borón, 2003) en América Latina –luego del período en que se desplegaron las dictaduras pretorianas civil-militares– alentaron la esperanza de un rápido retorno a los procesos nacional-populares –y aún la posibilidad de intentar desarrollar proyectos de carácter socialista– que habían caracterizado la política latinoamericana en las décadas de la inmediata posguerra mundial. Lejos de esas esperanzas, las democracias surgidas con el fin de las dictaduras en los años 80 del siglo XX dieron paso a la consolidación de políticas económicas que, atenuadas por el fenómeno de la deuda externa y las demandas de los sectores concentrados de la economía (en particular de las muy fortalecidas elites financieras), se transformaron rápidamente en procesos de carácter regresivo para las aspiraciones populares. Puestos los gobiernos "transicionales" a optar por retomar políticas de carácter inclusivo y nacionalistas o profundizar el modelo neoliberal, eligieron esto último. La segunda mitad de la década de 1980 y toda la de los 90 vieron el despliegue de un profundísimo proceso de políticas denominadas de "ajuste estructural", una ampliación de las políticas neoconservadoras que ya habían desarrollado las dictaduras, aunque encuadradas en un nuevo nombre: "neoliberalismo".

Estas políticas –que se desplegaron en Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, América Central y el Caribe (con la excepción de Cuba) y México– identificaron como "problema" el tamaño y dimensión del Estado, el "alto costo" de los bienes industriales de producción nacional frente a los de los mercados emergentes, las dificultades para sostener el valor de las monedas frente al dólar y lo que consideraban un costo "elevado" de la mano de obra. Frente a este diagnóstico, en los distintos países latinoamericanos se llevó a cabo el experimento neoliberal avalado por el denominado "Consenso de Washington" (Lechini, 2008): privatización o cierre de las empresas de gestión estatal, apertura indiscriminada de la

economía, toma de deuda externa para compensar el déficit presupuestario y la balanza de pagos, reducción de la planta laboral estatal con procesos de retiros voluntarios, jubilación anticipada o despidos masivos, baja de salarios y disminución de derechos laborales, descentralización, reducción o privatización de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y políticas de restricción monetaria e internacionalización de las economías nacionales por la ampliación del peso de las compañías transnacionales en las economías locales.

El resultado de estas políticas –que fueron presentadas como un ajuste "necesario" para lograr salir de la crisis económica que afectó a Latinoamérica a partir de la crisis de la deuda mexicana en 1982– fue, como ha sido ampliamente estudiado, el de un agravamiento de los problemas que los países latinoamericanos ya tenían antes de las políticas de ajuste. A los problemas estructurales de estancamiento económico, precariedad de la mano de obra, condiciones precarias de vida y en la provisión de servicios de salud y educación, las políticas de ajuste agregaron una baja considerable en la tasa de empleo, reducción del salario, ampliación de la economía informal, crecimiento de la deuda externa, reducción de la capacidad de gestión de los estados (en todos sus niveles), destrucción de las economías industriales, encarecimiento de los servicios públicos ahora privatizados y, finalmente, crisis bancaria y financiera.

La inestabilidad social que siguió a todos estos procesos generó reacciones populares: se inició la ola de protestas del "caracazo" contra las políticas de ajuste de Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989), la caída del presidente de Ecuador por la crisis financiera en 1999, la llamada "Guerra del Agua" en el año 2000 en Bolivia o la crisis de 2001 en Argentina, y también procesos electorales que llevaron al poder a movimientos o partidos populares que habían estado fuera del gobierno hasta ese momento, como el Frente Amplio en Uruguay (2005), el Partido Trabalhista en Brasil (2003) y el Chavismo en Venezuela en 1999 (Arceo, 2006).

## El ciclo nacional-popular de inicios del siglo XXI

Así, en la primera década del siglo XXI América Latina vivió un período de llegada al poder de un conjunto de gobiernos populares que, retomando tradiciones nacionalistas, populares, antiimperialistas y democráticas, llevaron a cabo un conjunto de transformaciones de carácter económico-social que tenían una larga data de demandas incumplidas. En general, y con matices variados según los países, ese conjunto de cambios impulsados pueden describirse como: la ampliación ostensible de la intervención estatal en el direccionamiento de la economía; la limitación o regulación de las actividades económicas desarrolladas por las empresas y conglomerados transnacionales; la recuperación o creación de empresas estatales o mixtas con mayoría accionaria estatal; la recuperación de las definiciones nacionales en materia económica, a partir de un proceso de desendeudamiento y búsqueda de financiamiento propio, o en mercados no tradicionales de capitales (por ejemplo, China y los *swap* de monedas), lo que conllevó una reducción considerable del peso y poder de los organismos tradicionales de crédito internacional (en particular el FMI y el Banco Mundial); una tendencia creciente al despliegue de políticas inclusivas de carácter educativo, sanitario y económico basadas en la lógica de los derechos universales; la vocación y la organización de organismos de integración latinoamericana, buscando limitar el peso del tradicional intervencionismo norteamericano y –en menor medida– europeo en la política exterior latinoamericana (ampliación de MERCOSUR, UNASUR, ALBA, CELAC, etcétera).

Este proceso de construcción de gobiernos –que llamaremos nacional-populares (Vilas, 2005)– alcanzó su máxima extensión en el inicio de la segunda década de este siglo: un observador que se centrara en el año 2010 encontraría a Evo Morales junto al Movimiento al Socialismo en la presidencia de Bolivia, Hugo Chávez en la de Venezuela, Rafael Correa en el Ecuador, Lula Da Silva y el Partido Trabalhista en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, José Mujica y el Frente Amplio recientemente electo en el Uruguay, Fernando Lugo (primer presidente no-colorado desde la década de 1950) en el Paraguay, el retorno del Frente Sandinista en Nicaragua y el primer mandato de Michelle Bachelet en Chile. No es exagerado afirmar que desde el período independentista fue la primera vez que coincidieron gobiernos con un perfil similar en términos ideológicos, de posicionamiento internacional y de políticas económico-sociales. Este período de quince años aproximados tuvo consecuencias profundas en términos de políticas públicas



y de movilización social, y también en relación a la percepción de los sentidos y los modos de la acción política. Asimismo, impactó en las formas y el comportamiento de los sectores populares y sus modos de organización. Por último, es necesario señalar que –algo no muy advertido en el período– hubo importantes modificaciones en los comportamientos políticos de las llamadas “clases hegemónicas” o las tradicionales elites latinoamericanas, su relación con el Estado y –particularmente– con la política.

## ¿Agotamiento de los gobiernos nacional-populares o cambios en los comportamientos de las elites hegemónicas?

Como ya señaláramos previamente, durante los primeros quince años de este siglo XXI gobiernos de carácter popular, democráticos y nacionales llevaron a cabo un proceso que –con matices y diferentes profundidades– hicieron crecer las economías latinoamericanas a tasas muy elevadas<sup>1</sup> y al mismo tiempo propiciaron –y lograron– mejorar las condiciones de vida y los servicios públicos para millones de personas.<sup>2</sup> Este proceso –que combinó crecimiento económico en los marcos de un capitalismo intervenido con diversas herramientas por el Estado en manos de gobiernos populares-democráticos– encontró limitaciones macroeconómicas a partir del impacto de la crisis internacional de 2008, en particular por la caída de los precios internacionales de bienes primarios, tales como el petróleo, el cobre, los granos y la carne. Este límite externo repercutió en las tasas de crecimiento, aunque no en la capacidad de los gobiernos nacional-populares para sostener los procesos de distribución del ingreso. Sin embargo, hubo otro efecto de la crisis: el freno al crecimiento económico y la baja en los precios internacionales de *comodities* pusieron a las elites, que –salvo en el intento de golpe venezolano de 2002– se habían mantenido ejerciendo una presión moderada sobre las políticas de los gobiernos populares, ante la disyuntiva de disputar el poder político o resignarse a una pérdida mayor de sus ingresos para sostener los procesos de redistribución de la renta en el nivel interno. No puede ser producto de la casualidad –nada lo es– que en la Argentina del año 2008 se produjera un levantamiento de los sectores terratenientes; que un año después se produjera en Honduras el golpe que lideró la Corte Suprema y derrocó al presidente Zelaya; un año más tarde (2010) un nuevo intento de golpe –en este caso policial, bancario y mediático– intentó derrocar al presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa; en 2012 un golpe –esta vez Parlamentario– depuso al presidente paraguayo Fernando Lugo; y en el año 2016 el gobierno constitucional de Dilma Rousseff en el Brasil fue depuesto en un juicio político comandado

por el vicepresidente, la clase política conservadora y los medios masivos de comunicación, en conjunto con el Poder Judicial. En todos los casos –los golpes destituyentes que “triumfaron” y aquellos que fracasaron en derrocar al poder ejecutivo– el bloque de poder hegemónico de cada país mostró una gran capacidad de iniciativa política. Debemos señalar que esa iniciativa también incluyó la participación en procesos electorales “limpios”, como es el caso de la Argentina.

Lo que queremos destacar es que, a diferencia de los procesos políticos de décadas pasadas, las clases hegemónicas abandonaron la estrategia política que descansaba en el golpe militar, para intentar formas nuevas de desplazamiento de los gobiernos nacional-populares. Estas formas nuevas combinan la movilización política de actores sociales, tradicionalmente muy reacios a participar en política, con un rol deslegitimador de las políticas nacionales, populares y democráticas a cargo de los medios de comunicación masivos, y con la emergencia –como ariete pre y post conflicto– de amplios segmentos del poder judicial como instrumento de judicialización de la política (Huertas y Cáceres, 2014). Este es un dato relevante a la hora de analizar la situación actual latinoamericana y lo que podríamos llamar un “empate” entre el modelo nacional-popular-democrático y el neoservadurismo en formato neoliberal.

En la *Argentina*, una coalición electoral que se originó en la tradicional derecha liberal-conservadora (PRO), quienes durante décadas no pudieron dar cuenta del acceso al poder sino por medio de golpes de Estado o del “entrismo” a partidos populares (por ejemplo, el menemismo y su alianza en el gobierno con sectores de la renta terrateniente y financiera), lograron, en articulación con el Partido Radical (tradicionalmente de “centro”), construir una estrategia electoral novedosa –basada en las nuevas tecnologías virtuales, junto a un discurso alejado de las recetas neoliberales del ajuste, el recorte presupuestario y el apoyo potente de los medios hegemónicos– que logró ganar por escaso margen las elecciones generales de 2015. A partir de ese triunfo inédito para la tradición argentina –un partido construido a partir de millonarios, con ministros y funcionarios gerentes empresariales y financistas– las clases hegemónicas argentinas (terrateñientes, financistas, industria transnacional) iniciaron un paulatino pero sostenido proceso de repliegue de las políticas estatales garantistas de derechos en materia de Derechos Humanos, educación, salud o comunicación. Este proceso de reconstrucción de un marco societal asentado en la desigualdad, el despliegue de una economía cada vez más excluyente y el

1. Por ejemplo, en el año 2010 la tasa de crecimiento de la región fue del 6% promedio, y más en algunos casos, como Uruguay (9,0%), Argentina (8,4%) o Brasil (7,7%) (CEPAL, 2011).

2. Según la CEPAL, la pobreza se redujo en un 15,2 puntos entre 2002 y 2016 en América Latina.

desarrollo de enormes negocios para los sectores tradicionalmente favorecidos, cuenta además con una inusitada actividad represiva que tomó por sorpresa a la sociedad argentina, luego de más de una década de movilizaciones callejeras (a derecha e izquierda) y de trabajadores. La figura de la prisión preventiva está siendo utilizada como instrumento de persecución política, generando inclusive la condena de organismos internacionales de Derechos Humanos; las movilizaciones y protestas de los pueblos originarios fueron ferozmente reprimidas en manos de las fuerzas federales; en la propia capital de la Nación, manifestaciones tradicionales en plena Plaza de Mayo han sido brutalmente reprimidas con decenas de heridos y detenidos en marchas de protesta por los recortes jubilatorios y de salarios docentes. La inversión en equipamiento represivo callejero para las fuerzas de seguridad ha subido un 500% y las bien pertrechadas fuerzas de gendarmería –armadas al estilo de las fuerzas antichoque israelíes y norteamericanas– contrastan con marchas civiles absolutamente pacíficas, con la participación de familias, niños y ancianos. Se ha vuelto práctica común el cacheo de personas en plena calle o en el transporte público, y la irrupción de fuerzas de seguridad en ámbitos educativos como escuelas y universidades.

En *Brasil*, la recomposición hegemónica neoconservadora desestimó el proceso legal y legítimo de las elecciones y eligió una estrategia de golpe civil (Anderson y otros, 2016). Durante el segundo mandato de la presidenta del Partido Trabalhista, Dilma Rousseff, se llevaron a cabo diversas iniciativas –originadas en la Cámara de Diputados– con el objetivo de llevar adelante procesos de *impeachment*. El trascurso finalizó con una votación a inicios del año 2016 que –sin pruebas ni delito alguno comprobable– consumó un golpe civil en la potencia económica más importante de América Latina. El gobierno surgido de ese golpe parlamentario ha sido el de Michel Temer (ex vicepresidente de Dilma Rousseff) y, del mismo modo que en Argentina –pero sin legitimidad de origen– se inició una acelerada recomposición neoconservadora: el equipo ministerial de Temer está compuesto en su casi totalidad por varones blancos, provenientes del mundo de los negocios o de la elite terrateniente y financiera. La agenda de gobierno de Temer ha sido –pese a la fragilidad y su escaso apoyo por parte de amplísimos sectores de la sociedad brasileña– acelerada: en diciembre de 2016 logró aprobar en el Congreso el congelamiento de los gastos de la administración federal por el término de 20 años. En julio de 2017 logró aprobar una reforma laboral recargada que redujo derechos laborales conquistados desde la época de Getulio Vargas. El paso siguiente es el de un amplísimo plan de venta de



bienes del Estado y la privatización de grandes empresas públicas. Acompañando este modelo de reconfiguración neoliberal, la política represiva ha sido terriblemente ampliada: en medio de una ola de protestas contra su gobierno –entre otras cosas por la reforma laboral y jubilatoria que redujo derechos de los trabajadores– el presidente solicitó al ejército que se encargue de la represión, algo que está expresamente vedado por la Constitución Brasileña. En el caso de las favelas de Río de Janeiro, el presidente golpista autorizó en septiembre de 2017 la utilización de fuerzas militares para combatir delitos comunes. La violencia en las zonas rurales –a manos de fuerzas policiales estatales junto a los terratenientes– ha recrudecido en Brasil: según la Comisión Pastoral de la Tierra, la cifra de asesinatos políticos del año 2016 fue de 60, y de más de 40 en los primeros seis meses de 2017.

En el caso de *México*, las fuerzas militares participan de lo que se denominó "guerra al narcotráfico" desde el año 2006. Pero el presidente Peña Nieto ha presentado un proyecto de ley –aprobado por ambas cámaras recientemente– en donde se autoriza al ejército a desplegarse en todo el ámbito del país en los casos "en que se amenace la seguridad interna" y se habilita al mismo ejército a realizar tareas de inteligencia interna y a utilizar "cualquier método de extracción de información dentro del marco legal" (Pereyra, 2012).

En *Honduras*, las consecuencias de la interrupción democrática del gobierno de Manuel Zelaya –que había intentado un acercamiento con los gobiernos nacional–populares de América del Sur–, en una alianza entre la Corte Suprema de Justicia y los partidos de derecha, se prolongaron hasta las recientes elecciones, en donde el candidato de derechas (Juan Orlando) llevó adelante un fraude tan escandaloso que hasta la propia Organización de Estados Americanos declaró que debía realizarse nuevamente el escrutinio. Las protestas callejeras fueron brutalmente reprimidas y el fraude va camino a consolidarse.

En *Paraguay* (Soler, 2014) el golpe institucional de 2012 destituyó –en una modalidad similar a la de Brasil, pero "exprés"– al presidente legal y legítimo Fernando Lugo y dejó en el gobierno a su vicepresidente conservador, Duarte Frutos. El bloque político de derechas ni siquiera pudo aguantar las tibias reformas sociales de Lugo y devolvió en las elecciones de 2013 el poder al Partido Colorado, de la mano de Horacio Cartés, quien pertenece a una familia de empresarios con negocios legales y otros cuestionados por la justicia, proviene del mundo del fútbol como dirigente y

cree firmemente en las políticas pro-mercado. Desde 2013 la represión –especialmente contra los campesinos y las colonias que buscan instalarse en tierras públicas– ha crecido considerablemente, al mismo tiempo que la presencia de terratenientes brasileños sojeros amplía su esfera de influencia y fuerza a una política rural cada vez más represiva.

En *Guatemala* las elecciones del 2015 le dieron la presidencia al actor cómico y empresario Jimmy Morales por una confluencia de derechas –con base en el partido fundado por exmilitares genocidas de los años 80– llamada Frente de Convergencia Nacional (FCN). Durante el año 2017 se produjeron doce desalojos de comunidades campesinas indígenas, con un total de 1.016 personas expulsadas por fuerzas militares y guardias privadas. El gobierno propuso una ley que califica como actos terroristas a las marchas y las movilizaciones sociales, y también propuso un decreto-ley para amnistiar los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas Guatemaltecas. Los golpes, maltratos y hasta asesinatos de líderes campesinos y sociales han recrudecido en el país, que es el primero en seguir la política norteamericana en Medio Oriente.

Un "clima de época" represivo ha retornado a América Latina. En ninguno de los seis casos señalados gobiernan fuerzas militares y en todos ellos –con sus más y sus menos– funcionan las instituciones republicanas, es decir, en las formas hay elecciones, un congreso y funcionarios civiles. ¿Dónde encontrar la razón común por la que todos estos gobiernos profundizan sus organizaciones, sus leyes y sus acciones represivas? En todos los casos son gobiernos de derechas que impulsan el despliegue del modelo neoliberal. Allí está la raíz del nuevo ciclo represivo: las políticas neoliberales son incompatibles con la pervivencia de una democracia con inclusión política creciente y políticas públicas progresivas: necesitados de profundizar la apropiación del excedente económico para los terratenientes, los grandes industriales locales y transnacionales y las demandas de los grupos financieros locales y transnacionales, inevitablemente los gobiernos de derechas deben afectar los intereses y logros de los trabajadores industriales, de los campesinos y sus comunidades, de los pueblos originarios y sus tierras, de los trabajadores estatales y de los servicios educativos, sanitarios y sociales que el Estado brinda o pueda brindar.

Luego de quince años de gobiernos nacional–populares, las derechas latinoamericanas han modificado profundamente su comportamiento político, dejando de lado su tradicional "distancia" con el juego de la democracia y los procesos electorarios. Han decidido no dejarse representar por

las fuerzas armadas, ni por partidos populares "devenidos" neoliberales. Han reaccionado con una vocación "nueva" por acceder directamente al control del Estado. Sin embargo, en el mediano y largo plazo se abren serias dudas con respecto a la pervivencia del sistema institucional democrático bajo gobiernos de derechas en América Latina. Llevar adelante "sus" programas "en democracia" implica tener que lidiar con una movilización y una protesta social creciente. Allí, en la respuesta a la movilización social creciente, radica el corazón de este nuevo ciclo represivo.

## Bibliografía

- Anderson P y otros (2016): *Golpe en Brasil: genealogía de una farsa*. Buenos Aires, CLACSO, Fundación Octubre, UMET.
- Arceo E (2006): "El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina. Estrategias de los sectores dominantes y alternativas populares". En *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires, CLACSO.
- Borón A (2003): *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO.
- CEPAL (2011): *Panorama social de América Latina 2011*. Santiago, CEPAL.
- López Obregón C (2014): "La Estrategia del camaleón. Nuevas formas del golpismo en América Latina". Ponencia en el *Encuentro de Partidos y Movimientos de Izquierda*. Quito, Ecuador.
- López Segrera F (2016): *América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha*. Buenos Aires, CLACSO.
- Giordano V (2014): "¿Qué hay de nuevo en las nuevas derechas?". *Nueva Sociedad*, 254.
- Huertas O y V Cáceres (2014): "Los golpes de Estado constitucionales en Latinoamérica: una amenaza emergente para el principio democrático". *Justicia Juris*, 10(2).
- Lechini G (2008): *La globalización y el Consenso de Washington: sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el sur*. Buenos Aires, CLACSO.
- Pereyra G (2012): "México: violencia criminal y 'guerra contra el narcotráfico'". *Revista Mexicana de Sociología* 74, 3.
- Soler L (2014): "Golpes de estado y derechas en América Latina". *Nueva Sociedad*, 254.
- Trotta N y P Gentili (2016): *América Latina: la democracia en la encrucijada*. Buenos Aires, La Página, CLACSO, Fundación Octubre, UMET.
- Vilas CM (2005): "La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares". *Nueva Sociedad*, 197.